EL CASO “URTEAGA”: UN HABEAS DATA NOVEDOSO PARA RELACIONAR DERECHOS Y GARANTÍAS

Por el académico DR. GERMÁN J. BIDART CAMPOS

Yo había elegido como tema un fallo de la Corte Suprema del año pasado: el caso “Urteaga”, fallado en octubre, que a mí personalmente me despertó muchas ideas, me hizo pensar cosas que antes no se me habían ocurrido. Y este fallo viene, de alguna manera, enganchado a otro anterior del mes de agosto del año pasado. Creo que una comparación, un paralelo entre uno y otro, puede ser útil a efectos de las reflexiones que voy a hacer.

En agosto, en el caso “Aguiar de Lapacó” en el proceso penal a Suárez Mason, esta señora Aguiar de Lapacó, madre de una desaparecida, había pedido que se le proveyeran informes sobre lo que había pasado con su hija. El proceso penal a Suárez Mason tenía la acción penal extinguida; entonces la Corte, por mayoría, entendió que no correspondía hacer lugar al requerimiento.

El voto en disidencia de Boggiano fue el que me alborotó las ideas porque, cuando lo empecé a leer, me sorprendió que él enseguida hiciera una remisión al art. 43 de la constitución en el párrafo dedicado al amparo que yo llamo “habeas data

innominado”. No usa esa terminología el artículo pero es un habeas data, y ahí se me alborotaron las ideas, porque me dije: ¿qué tiene esto que ver?

Cuando seguí leyendo y me puse a reflexionar, me di cuenta de lo interesante del problema, más allá de la posición que cada quien pudiera tomar. En las disidencias, consideraron que aunque la acción penal estaba extinguida, el objeto del proceso penal no estaba agotado. Esto, un poco al margen de lo que después diré en comentario a “Urteaga” por lo que tengo oído de los especialistas en criminología, en derecho penal, etc., hoy se le da mucha importancia a la victimología, es decir, al papel, al protagonismo, a la situación de la víctima del delito.

Entonces tomé partido enseguida por las disidencias, porque se me ocurrió pensar -no soy penalista, ni domino el derecho procesal penal- que si el papel de la víctima y los derechos de la víctima dañada por el delito son importantes en un proceso penal, con la acción penal extinguida, quedaba algo todavía para que los familiares de la víctima pudieran pedir la información que ahí recababan. Pero la Corte, por mayoría, despachó negativamente la solicitud de esta señora Aguiar de Lapacó, en agosto.

En octubre, sorprendentemente -se me ocurre decirlo esto a título exclusivamente personal-, como queriendo reparar un poco lo que había resuelto la Corte por mayoría en “Aguiar de Lapacó”, el Tribunal en forma unánime, hace lugar en el caso “Urteaga” al requerimiento del hermano de una víctima desaparecida para obtener información. El actor interpuso su pretensión a través de un habeas data innominado, párrafo 3ro. del art. 43. Repito: la Corte por unanimidad hizo lugar a la pretensión, pero en los votos hay muchas diferencias en el encuadre, en el fundamento de la decisión afirmativa.

Tal vez esto no sea lo más importante para lo que yo quiero comentar: Algunos de los jueces de la Corte entendieron que estaba bien planteada la pretensión a través de un habeas data y que era la ruta procesal adecuada; otros dijeron no, que

tenía que ser el amparo genérico, el amparo común, en fin, acá un poco la Corte deja una muy buena lección, el principio “pro actione”, es decir si acaso el “nomen iuris” de la acción, tal como a esa acción la plantea el justiciable, el Tribunal entiende que está equivocado, por el “iura novit curia” lo tiene que modificar y a la pretensión darle trámite por la vía que el Tribunal considere correspondiente, adecuada.

Pero lo fundamental acá para mí, para lo que a mí se me ocurrió y quiero hoy transmitirles, es la relación que podemos hacer entre los derechos y las garantías, tema viejo, pero repensado a la luz de estas dos causas, la de “Aguiar de Lapacó” y la de “Urteaga”, me parece que cobra un perfil interesante, novedoso. La idea mía, la planteo de entrada, después, la explico un poco, es ésta:

Estamos acostumbrados a pensar que para determinado derecho la constitución arbitra determinada garantía. Siempre hemos dicho: para la libertad corporal, el habeas corpus; para los demás derechos, el amparo. Ahora, más recientemente, para proteger la autodeterminación informativa, el derecho a la intimidad y el derecho al honor, etc., etc.: el habeas data.

A mí el caso “Aguiar de Lapacó” y el caso “Urteaga” me hicieron pensar en esto de adjudicar a determinado derecho determinada garantía -cuando digo garantía pienso en la ruta procesal para hacer valer ese derecho-; no tenemos que adosar de una manera inexorable un derecho a una garantía y una garantía a un derecho, porque son las circunstancias de cada caso las que también en cada caso nos han de decir cuál es el cauce procesal conveniente, útil, idóneo para determinado derecho, de modo que el acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial eficaz, puedan quedar satisfechos.

Vuelvo al caso “Aguiar de Lapacó”. La Corte dijo “no” al pedido de información en el proceso penal cuya acción penal estaba extinguida y por consiguiente según la Corte también el objeto del proceso penal estaba extinguido. En “Urteaga” hizo lugar a la pretensión; se pedía lo mismo en un caso y en el otro

caso. Dijo sí, hay que hacer lugar al pedido de informes, al pedido de información.

¿Por qué no podía servir el proceso penal para la pretensión articulada? Repito: yo creo que había cauce más que suficiente para haber resuelto la cuestión. En “Urteaga” dijo sí, con esas diferencias: algunos jueces dijeron amparo común, otros dijeron habeas data. ¿Qué derechos estaban acá en juego? Se dijo el derecho a la verdad, a saber la verdad, la verdad de lo que le había ocurrido a esa persona desaparecida. Esa verdad se quería conocer en un proceso penal de acción extinguida y la Corte dijo “no” por mayoría. Esa verdad se quería conocer en “Urteaga” a través de un habeas data, y la Corte dijo sí. Entonces a mí se me ocurrió pensar en el derecho a la verdad, también, en un juicio de filiación, donde se pretende que la filiación legal coincida con la biológica, si se quiere saber la verdad, se quiere obtener el reconocimiento a un derecho a la verdad y tal vez éste lo pudiéramos generalizar tanto hasta llegar a adoptar la pauta de la jurisprudencia de la Corte cuando nos dice que los jueces tienen que priorizar la verdad material objetiva por sobre la verdad formal, es decir la búsqueda de la verdad material parece que está presente en todo proceso, cualquiera sea la índole del proceso, de la modalidad de la vía procesal, o de la acción interpuesta. Nosotros, el derecho a la información lo tenemos clásicamente pergeñado como uno de los contenidos de la libertad de expresión. Acá, el perfil parece que no era ése exactamente, el derecho a la información.

En algunos de los votos en el caso “Urteaga” aparecen otros derechos. Se mencionan para dar fundamento a esta información que recababa el hermano de la víctima, y se menciona el derecho a elaborar el duelo, a enterrar a los muertos. Bossert dice: a conocer el destino de aquellas personas con las que existen vínculos familiares, es decir el derecho a la identidad personal está tramado con relaciones familiares; los vínculos familiares de Bossert que determinan el “estado familiar” integran la identidad de la persona. Todos esos derechos acá confluyeron

para hacer viable una pretensión que, repito, el actor planteó a través de una acción de habeas data.

Cuando en “Aguiar de Lapacó” las disidencias, sobre todo la de Boggiano que invocó el art. 43 y el habeas data y el derecho a la verdad, cuando las disidencias consideraron que en ese proceso penal se debía hacer lugar al pedido de informe, plantearon un problema interesante para esta nueva idea que he tratado de explicarme a mí mismo y desarrollar, después, en algunos comentarios.

Hay que ver en cada caso si determinada vía procesal es idónea para lo que se pide. ¿Por qué no podía ser idónea? ¿Y no debía ser idónea la vía de un proceso penal cuya acción penal estaba extinguida? La mayoría dio la razón por la que no podía ésa ser la vía procesal adecuada, no usó el principio “pro actione” ni el cambio del “nomen iuris” de la acción, directamente bajó el telón, dijo no. Las disidencias dijeron sí.

En “Urteaga”, repito, perdonen mi insistencia, con distintos andamios en cuanto a la vía procesal a utilizar, todos los ministros de la Corte coincidieron en que había que hacer lugar al pedido de información. Entonces eso de que estamos acostumbrados a pensar que a determinado derecho le corresponde determinada garantía, determinada acción, y que tal acción es para determinado derecho, no debe ser tan rígido, no debe ser tan duro.

El derecho a la verdad en cada proceso puede hacerse valer y canalizarse por rutas procesales distintas. En el proceso penal se quiere saber la verdad sobre si la conducta es típicamente delictuosa, si quien parece ser el autor es el autor, si corresponde aplicarle la sanción penal.

En un juicio de filiación, repito, también se quiere hacer coincidir la filiación legal con la filiación biológica. La vía procesal es otra, el derecho puede ser el mismo, pero de acuerdo con las circunstancias de cada caso, es decir, el perfil, la modalidad del derecho varía según las circunstancias de cada caso.

Ya la Corte había dicho hace dos años, creo, que las asociaciones de usuarios que por el art. 43, 2º párrafo, tienen legitimación para interponer ese tipo de amparo, tienen legitimación también para interponer una acción declaratoria de certeza del art. 322 del Código Procesal. Es decir, vamos despegando un poco esa adherencia dura de determinada garantía, de determinado derecho que necesita, inexorablemente, transitar para hacerse valer por determinada garantía.

Fijémonos acá en el caso “Urteaga”. Se trataba de una víctima desaparecida y sin embargo a nadie se le ocurrió decir que había que interponer el habeas corpus del último párrafo del art. 43 que está previsto para la desaparición forzada de personas. ¿Por qué?

Porque después de tanto tiempo evidentemente ésa no era la vía que podía resultar útil para la pretensión articulada. De manera que hay que ir, un poco, agilizando la perspectiva de la relación entre los derechos y las garantías.

Esto me sirve para -en orden a este tema específico- decir algo que siempre digo: tenemos que poner bajo revisión, para repensar con nuevas ideas, con nuevas perspectivas, lo que clásicamente durante mucho tiempo a lo mejor se tuvo como siendo de una manera determinada y no podía ser de otra. Es decir, creo que acá ya utilicé una vez la expresión: tengo mucho miedo a caer en “esclerosis académica”. Es decir, en tener la idea de que algo sigue siendo como era antes siempre, nada más que porque antes era así tiene que seguir siéndolo de la misma manera.

Acá, entonces, hay que -yo diría- ablandar la rigidez o la dureza con que hemos podido pensar que determinado derecho solamente se puede hacer valer a través de determinada garantía, o que determinada garantía no es hábil nada más que para canalizar determinado derecho.